

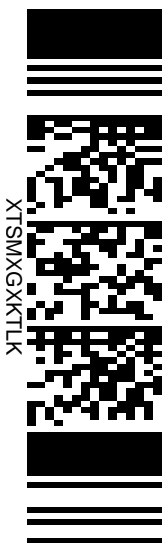
C.A. de Santiago

Santiago, catorce de julio de dos mil veintitrés.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

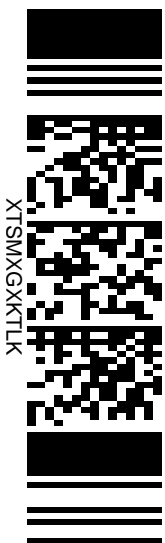
1º) Que comparece don Juan Pablo Solorza Kojakovic, abogado, en representación de **Compañía General de Electricidad S.A.**, sociedad de giro de distribución de electricidad, y según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, deduce reclamación de ilegalidad en contra de las Resoluciones Exentas N°11959 de 26 de abril de 2022 y N° 35435 de 29 de agosto de 2022, ambas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por haber la primera aplicado a su parte una multa de 1000 Unidades Tributarias Mensuales, y la segunda por haber rechazado su recurso de reposición en contra de la sanción aludida, por lo que solicita a esta Corte que, acogiendo el presente reclamo, deje sin efecto dichas resoluciones, con expresa condena en costas, y en subsidio rebajar el monto de la multa que le ha sido impuesta.

En cuanto a los antecedentes señala que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, haciendo uso de sus potestades de fiscalización, procedió a revisar la información de su parte, respecto del proceso de interrupciones de servicio individualizado “Interrupciones 2018” para el periodo que comprende de enero a diciembre del año 2020, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, y que en ese contexto, habría detectado que la Compañía reclamante



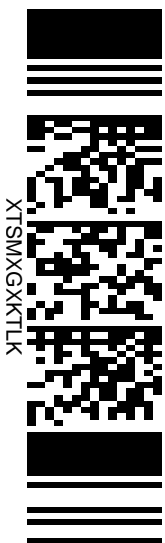
sobrepasó el límite máximo del indicador de “tiempo de interrupción por cliente” o SAIDI (por sus siglas en inglés), establecido en la normativa sectorial vigente, en diversas comunas del país. Producto de lo anterior la SEC formuló 6 cargos en su contra, cada uno notificado en Oficios independientes y que corresponden a diferentes comunas y regiones del país, los que se fundamentan en el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, ello, en relación con los artículos 145° y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y en relación con los artículos 72°-14 y 130° de la Ley General de Servicios Eléctricos, calificando la supuesta infracción como “gravísima”, de acuerdo con el artículo 15 N° 4 de la Ley N° 18.410, en virtud de la cual aplicó una multa de 1000 UTM y, posteriormente, conociendo de la reposición oportunamente deducida al efecto, igualmente lo rechazó, mediante la RE N° 35435 de 29 de agosto de 2022, manteniendo así íntegramente la referida sanción.

Refiere en cuanto a sus descargos, en síntesis, que no negó la ocurrencia de la infracción en la comuna afectada, reconociendo además haber sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente en la comuna de La Higuera, pero que lo cierto es que no ha quedado indiferente frente a dicha situación, muy por el contrario, tal como ha sido expuesto a la Superintendencia en numerosas y diversas



reuniones y comunicaciones, su representada se ha comprometido y ejecutado durante los últimos años un importante plan de gestiones de mantenimiento e inversiones con el propósito de mejorar cuantitativamente la calidad del suministro que entrega a sus clientes, que siempre ha estado su parte por mejorar la calidad del servicio de distribución eléctrica que ofrece a sus clientes y esto ha sido conocido por la SEC, ya que se le han informado los diversos planes de acción, inversión e iniciativas que la Compañía ha adoptado para mejorar y mantener la infraestructura eléctrica en buen estado. En este sentido, destacando que cumplió con la elaboración de un acabado “Plan de Evaluación de la Integridad de la Calidad de Servicio” que buscaba justamente evitar indisponibilidades de suministro de electricidad o en su defecto propender a la restitución del servicio en un breve plazo, así como también la elaboración de un Plan de Contingencia y aplicación ante la ocurrencia de cualquier evento de la naturaleza, climático o derivado de fallas y/o desconexiones que afecten la continuidad de suministro de electricidad a usuarios finales, sean o no de responsabilidad de CGE.

En cuanto a los fundamentos de su reclamación, en primer término, estima que la Superintendencia impone una sanción gravísima que no está determinada o correctamente tipificada en una norma de rango legal, ya que en este caso concreto, la sanción aplicada por la autoridad tiene como base



legal la norma que regula la calidad del servicio de distribución en el artículo 130° de la LGSE, que establece la siguiente conducta: *“La calidad de servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos”*.

En ese sentido, el estándar de conducta que exige la norma a CGE, como empresa distribuidora de servicio público, es operar con una calidad de servicio que corresponda a *“estándares normales con límites máximos de variación”* según lo que determinen los “reglamentos”, pero que en la especie los parámetros de dicha conducta son tan amplios e indeterminados en la ley, que no permiten a las empresas distribuidoras identificar cómo o cuándo deja de cumplir un estándar normal, bajo los límites máximos, así el legislador ha previsto únicamente que se determinen a través de reglamentos, esto es, mediante decretos expedidos del Ministerio de Energía.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de autos la definición de “normalidad” o “anormalidad” de la calidad del servicio de distribución se especificó en una simple norma técnica, dictada por la Comisión Nacional de Energía o CNE sin respetar por consiguiente el principio de tipicidad. Que



en este punto, resulta esencial considerar que el artículo 19 N° 3 de la Constitución establece que *“corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”*, siendo así que en contravención a la referida garantía la reclamada aplicó estándares contenidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, que es una norma aprobada por una mera resolución de la CNE, exenta del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, y por lo tanto no cumple con tener la naturaleza jurídica de un reglamento, de acuerdo con lo que establece expresa y exclusivamente el artículo 130° de la LGSE antes reseñado, para la definición del estado normal y los límites máximos variación de la calidad del servicio de distribución.

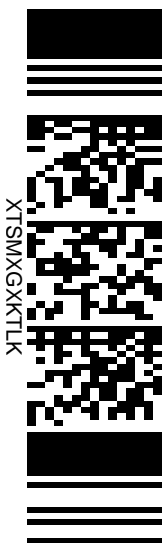
Como segundo fundamento alega una errada calificación de la infracción como “gravísima”, de acuerdo con el artículo 15 N°4 de la Ley N° 18.410, por cuanto en dicha norma se dispone, en lo pertinente *“Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente: 4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora.”*

Así, en este punto el ordenamiento sectorial establece que para atribuir a la infracción el carácter de gravísima, la



conducta debe reunir copulativamente dos requisitos, como son, primero alterar la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y segundo afectar a lo menos el 5% de los usuarios abastecidos por la infractora, siendo el texto de la ley claro al indicar “*usuarios abastecidos por la infractora*”, sin añadir una calificación adicional, restrictiva a un espacio geográfico, tampoco permitiéndose en la norma un espacio discrecional de calificación para que la autoridad pueda complementar, caso a caso, la base o el universo de cálculo de los clientes para obtener el porcentaje antes aludido.

Afirma que la Compañía General de Electricidad al 31 de diciembre de 2020 contaba con un número total de usuarios de 3.066.920, siendo ese el guarismo que de acuerdo al artículo 15 N° 4, debe ser considerado para efectos de calcular el porcentaje de usuarios afectados por una afectación en la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio, lo que en el caso de autos no ocurrió, ya que la Superintendencia sancionó a su parte considerando solamente a los clientes afectados en las respectivas comunas individualizadas en las distintas comunas, según cada Oficio y posterior Resolución Exenta, lo que implica una interpretación extensiva de la norma, prescindiéndose de lo expresamente consignado en ella, lo que se tradujo en una determinación mayor de usuarios afectados y por lo tanto un porcentaje mayor al 5 %, correspondiendo -asegura- en realidad a un 0,1%.



Como tercera ilegalidad, plantea la infracción del principio “*non bis in ídem*”, comprendido como principio básico del derecho administrativo sancionado, en cuanto existe la prohibición de sancionar o agravar la sanción múltiples veces, respecto de una misma conducta en la que se aprecie una identidad en el sujeto supuestamente infractor, en el hecho y en el fundamento.

Sostiene que el supuesto anterior se puede apreciar debido a que la transgresión del indicador SAIDI que se le atribuye, se utiliza por la SEC para sancionar a su representada en diversas comunas del país, y además se utiliza por segunda vez para calificar la infracción como gravísima, y que igualmente al momento de resolverse la reposición presentada, nuevamente se usa la disgregación de multas y comunas, para invocarla como un elemento calculador del *quantum* de las mismas al señalar que “*En el proceso correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2020, la empresa es reincidente en cuanto al incumplimiento del SAIDI, lo que fue tenido en cuenta para determinar el monto de la multa aplicada*”. En consecuencia, en otras palabras, afirma que se utiliza el mismo hecho para sancionar múltiples veces, calificar la conducta como “gravísima” y además para determinar el *quantum* de la multa, lo que se puede constatar en los expedientes de los procesos sancionatorios instruidos por la SEC, iniciados mediante:



(i) Oficio Ordinario N° 91884, y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11957;

(ii) Oficio Ordinario N° 91885 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11958;

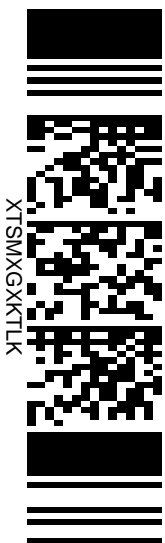
(iii) Oficio Ordinario N° 91886 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N°11959;

(iv) Oficio Ordinario N° 91887 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11960;

(v) Oficio Ordinario N° 91889 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11963; y

(vi) Oficio Ordinario N°91890 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11964.

En cuarto lugar, estima que la RE N° 11959 ha sido dictada con una clara contravención al principio de proporcionalidad y ello como consecuencia de las infracciones a los principios constitucionales de legalidad y *non bis in ídem*, pues la multa resulta muchísimo más drástica para CGE, al calificar la infracción como gravísima, llamando la atención a la reclamante de ilegalidad que el acto aludido como referencia para indicar la capacidad económica de su representada recurra a su Memoria Anual del año 2021, cuando la sanción fue aplicada durante el 2020 que fue el año con más dificultades y repercusiones en los Estados Financieros para la gran mayoría de las empresas del país, en que ocurrió la más importante crisis sanitaria a nivel mundial, se han suspendido la aplicación de tarifas y, entre otras medidas, se ha dictado la





Ley N° 21.249, cuya vigencia fue prorrogada mediante la Ley N° 21.301, que establece una serie de beneficios en favor de los usuarios de los servicios básicos, dentro de los cuales están los clientes finales de CGE, impidiendo el corte de los suministros por deuda durante 270 días y la posibilidad de pactar el pago de las deudas de suministro de estos servicios, devengadas entre el 18 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2021, hasta en 36 cuotas, sin multas, intereses, ni gastos asociados. Agregando que, en efecto, esta multa, por su magnitud, es completamente alejada al contexto político, social y económico y, en especial, a los grandes esfuerzos presupuestarios o patrimoniales que de diversas formas se han impuesto a la recurrente de ilegalidad, en su situación de concesionaria de servicio público eléctrico en beneficio de usuarios, clientes o consumidores finales, siendo absurdo que se argumente la aplicación de una multa elevada simplemente por su presencia en el mercado eléctrico nacional, constituyendo la proporcionalidad un aspecto técnico de la razonabilidad y se vincula con la entidad de la sanción que se impone, todo lo que se ve reflejado de la redacción del artículo 16 de la Ley 18.410.

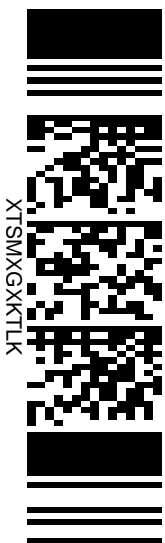
Pide en consecuencia que se declaren ilegales las Resoluciones Exentas N°s 11959 y 35435 de la SEC por no ajustarse a la Constitución, la Ley General de Servicios Eléctricos, sus reglamentos, la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución y demás disposiciones



que le corresponde aplicar, dejándolas en consecuencia sin efecto, que se absuelva a su parte del cargo formulado, condenándose en costas al servicio recurrido, pidiendo, en subsidio de lo anterior, rebajar proporcionalmente la multa establecida de 1000 Unidades Tributarias Mensuales, en razón de lo dispuesto el artículo 16 de la Ley 18.410.

2º) Que comparece la reclamada, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, evacuando informe en esos autos, solicitando se rechace el reclamo, al no existir ilegalidad alguna en el actuar de su parte.

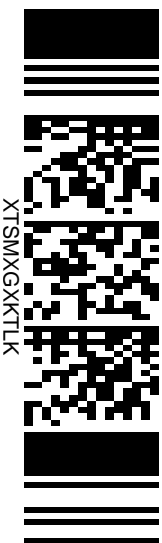
Señala en primer término que las resoluciones de la Superintendencia tienen su fundamento en las funciones que le encomienda su normativa orgánica, contenida en la Ley N° 18.410, cuyo artículo 2º previene que su objeto será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas y que, por su parte, el Título IV de dicha ley, la faculta para imponer las sanciones que en ella se indican por las infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en



incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por el Servicio.

Sin perjuicio de toda la normativa que resulta aplicable en autos y que transcribe, indica que con ocasión de haber recibido la información correspondiente a las interrupciones de suministro que afectan a las redes de distribución de cada una de las concesionarias, la Superintendencia, a través del Oficio ORD. N° 91886, de fecha 26 de octubre de 2021, formuló cargos a la Compañía General de Electricidad S.A., del siguiente tenor: *“Incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los Artículos 145° y 221, del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación a los artículos 72-14 y 130° de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se desprende de la información aportada por la empresa en el proceso denominado “Interrupciones 2018”, la cual indica que se ha sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente, en la comuna señalada en el punto 4 del oficio antes individualizado”*. Y que al respecto, y dentro del plazo otorgado a la reclamante de ilegalidad para presentar sus descargos, la Compañía General de Electricidad evacuó el trámite aludido el 25 de noviembre de 2021.

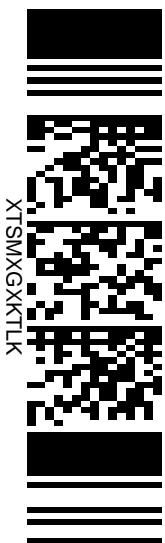
Afirma que en la especie los antecedentes recabados fueron debidamente analizados y ponderados por el Organismo Fiscalizador, concluyéndose que los mismos evidenciaban que



correspondía hacer exigible la responsabilidad de CGE, respecto de las infracciones que le fueron imputadas, por lo que, a través de Resolución Exenta N° 11959, de 26 de abril de 2021, atendido el carácter gravísimo de las infracciones constatadas, se le aplicó a la reclamante la sanción de multa equivalente a 1000 Unidades Tributarias Mensuales, y que en contra de esa determinación, se dedujo reposición, para ser dejada sin efecto la multa o en subsidio rebajada sustancialmente, siendo tal recurso rechazado a través de Resolución Exenta N° 35435, de fecha 29 de agosto 2022, por no haberse aportado antecedentes adicionales distintos a los tenidos a la vista al emitir la primitiva resolución impugnada.

Respecto a las ilegalidades invocadas, señala que del expediente de investigación aparece con claridad que los hechos constitutivos de las infracciones sancionadas se encuentran debidamente acreditados y que contravienen las disposiciones invocadas en la formulación de cargos, sin que existan dudas por parte de la Superintendencia de la normativa aplicable a los hechos infraccionales, ni del sentido y alcance de dicha preceptiva.

Sostiene que, acorde con la información proporcionada por la propia recurrente a través del proceso “Interrupciones 2018”, definido en virtud de la Resolución Exenta N° 11959, de 26 de abril de 2021, se pudo acreditar que en la Región de Coquimbo, en la comuna de La Higuera, la empresa

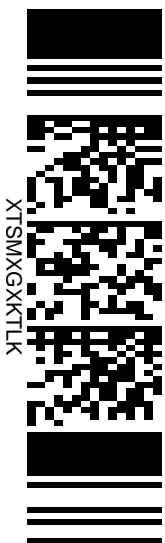


distribuidora sobrepasó el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente.

Destaca, que la recurrente, en sus descargos, no negó la ocurrencia de la infracción en la comuna afectada, reconociendo además haber sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente en la comuna de La Higuera, según los antecedentes ya mencionados.

Afirma que lo anterior es un claro reflejo de que las deficiencias por las que fue sancionada la recurrente efectivamente ocurrieron, en los términos atribuidos en la formulación cargos, por lo que resulta inadmisibile que ahora pretenda desconocer la existencia de infracciones. Y, añade, que todas las alegaciones vertidas en los descargos fueron analizadas y ponderadas, descartándose la configuración de caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a la regulación aplicable.

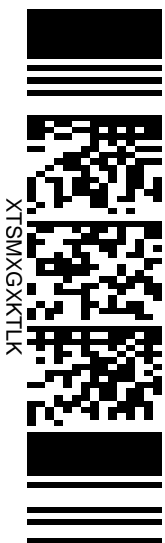
En cuanto a que la Superintendencia impone una sanción gravísima que no está determinada o correctamente tipificada en una norma de rango legal, reflexiona en concreto que las disposiciones que cita y transcribe en detalle reconocen y parten del supuesto de que los estándares de calidad de servicio y de suministro, o las exigencias en la calidad de suministro, pueden estar dictadas en la respectiva norma técnica, debiendo realizarse una interpretación sistemática y teleológica de la normativa, siendo lo anterior evidentemente



necesario, por cuanto en una materia eminentemente técnica, como es el desarrollo de los sistemas eléctricos, sus condiciones técnico-operativas, el estándar de calidad de servicio asociados a las mismas, y las exigencias relativas a la calidad de suministro son dinámicas y están en permanente evolución, debiendo ser reguladas en normas que permitan su pronta actualización.

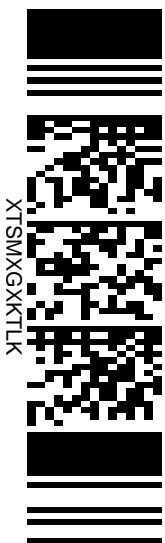
En razón a lo anteriormente planteado, expone que la normativa eléctrica se encuentra compuesta por una regulación heterogénea, que debe ser comprendida en su completitud, realizándose una interpretación sistemática y teleológica de la misma, no perdiendo de vista que los destinatarios de dicho precepto son actores que desarrollan una actividad económica monopólica, tarifada, de servicio público y que poseen un conocimiento técnico-especializado del sector en el que se desenvuelven.

En lo relativo a lo planteado acerca de que las resoluciones reclamadas serían ilegales porque incrementaría artificialmente el número de usuarios afectados en la comuna en la que se registró un exceso de SAIDI, precisa que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por



recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, separar la infracción de calidad de suministro por comuna - empresa, nada tiene de arbitrario, como alega la reclamante, sino que tiene su fundamento en la Norma Técnica, la cual establece estándares aplicables para cada par comuna – empresa, y conforme al principio de economía procedimental del artículo 9 de la Ley N° 19.880, se decidió agrupar las infracciones a nivel regional respecto no solo del cargo formulado por los hechos ocurridos en la Región de Coquimbo y que motivan el presente recurso, sino que de los otros Oficios en el mismo sentido, con los cargos en contra de la Compañía reclamante de ilegalidad, por infracción y hechos suscitados en distintas regiones y comunas del país, respecto de los que igualmente ha recurrido de ilegalidad y que se encuentran a la espera de ser conocidos por esta misma Corte.

En cuanto a la calificación de la infracción como gravísima, indica que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan para recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada

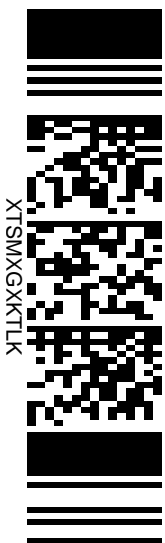


sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, no se han contravenido principios constitucionales ni legales, como alega la reclamante.

Señalando además en este punto que debe igualmente ser rechazada la alegación de infracción al principio de *non bis in idem*, por cuanto se ha sancionado por hechos ocurridos en diversas comunas de las distintas regiones del país, constituyéndose así cada hecho como distinto y por lo tanto no existe el supuesto planteado en tal sentido.

Señala que el porcentaje de usuarios afectados se calcula teniendo consideración cada comuna afectada en particular servida por la empresa infractora y no el universo total que abastece esa entidad, y que se tuvo en cuenta la duración de las interrupciones de suministro de responsabilidad de la empresa, en lo que dice relación con el presente reclamo, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, lo que evidencia una situación particularmente gravosa.

En lo atinente al monto de la multa y su proporcionalidad, indica que la resolución impugnada ponderó todas las circunstancias que contempla el artículo 16 de la Ley N° 18.410, en particular las invocadas por la reclamante, según consta aparece de lo razonado en los actos administrativos respectivos, que condujeron a fijar el valor que en definitiva se aplicó y no uno mayor o menor, atendida la gravedad de las infracciones.

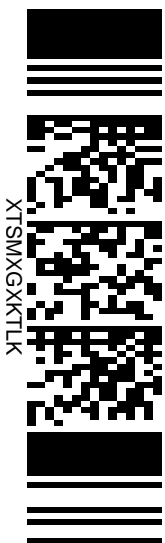




En cuanto al porcentaje o número de usuarios afectados por la infracción, indica que las interrupciones han alterado la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas, afectando a los usuarios abastecidos por la reclamante en la comuna ya individualizada, en un porcentaje mayor al 5%, concluyéndose en el caso de que se trata que la infracción era gravísima en los términos del artículo 15 N° 4), de la Ley N° 18.410, puesto que la infracción, además reconocida por CGE, ha afectado al 34,9% de los usuarios abastecidos por la Empresa en la comuna de La Higuera.

Sostiene que se ponderó la capacidad económica de la reclamante, dejando asentado la resolución que la ejecución, operación, mantenimiento y administración de proyectos eléctricos de distribución de la envergadura de los que posee, requieren de altas inversiones y gastos, y dan cuenta de una empresa robusta en términos financieros. Añade, que la capacidad económica de la reclamante se ve reflejada en su última Memoria Anual 2021 y Estado de Resultados, por lo que la sanción no compromete su operación.

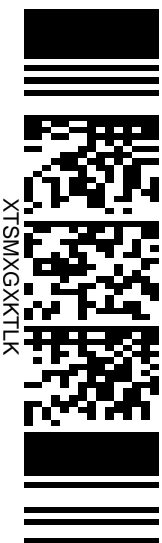
En lo referente a la afectación del principio de proporcionalidad alegado, arguye que la resolución se encuentra debidamente fundada y aplica todos los parámetros normativos para determinar la sanción y su *quantum*, particularmente considerando la idoneidad y necesidad de la medida impuesta, al no existir otro medio para exigir el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y



aplicando una sanción dentro de los límites establecidos, la cual se ha justificado suficientemente.

Señala que es la ley la que establece los rangos dentro de los que pueden fluctuar las multas que aplique la Superintendencia, los que han sido respetados por la resolución, no siendo desproporcionado el ejercicio de la potestad sancionadora en este caso, siendo improcedente la disminución de la multa que pide la recurrente. A este respecto, la Ley N°18.410 establece que las infracciones gravísimas pueden ser sancionadas hasta en 10.000 Unidades Tributarias Anuales, es decir 120.000 UTM, por lo que la multa de 1000 UTM aplicada, se encuentra dentro de rango. Añade que si se analizan los 6 elementos que impone considerar el artículo 16 para determinar una sanción, 5 de ellos tenían un impacto particular, esto es, la cuantía del daño generado a los clientes regulados, el beneficio percibido por la empresa, el porcentaje de usuarios afectados de la empresa en la comunas en donde se comprobó la infracción, que tiene conocimiento de sus obligaciones, y su excepcional capacidad económica, todo lo cual justifica la cuantía de la multa aplicada.

Sostiene que la Superintendencia se ha ajustado a la legalidad y a los antecedentes recabados o hechos valer durante la investigación, respetándose el debido proceso, formulándose cargos precisos, permitiéndose el derecho de defensa y atendándose las alegaciones de la fiscalizada, sin que los fundamentos esgrimidos por la reclamante aporten



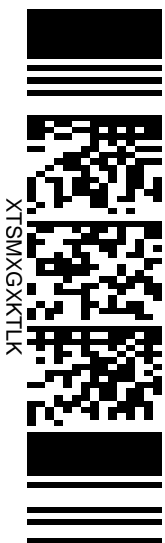
elementos que pudieran poner en duda la existencia de la infracción.

**3º)** Que, en síntesis, de los antecedentes del reclamo, se advierte que resultan ser hechos no controvertidos en el conocimiento de la presente acción los siguientes:

1. Que mediante Oficio Ordinario Electrónico N° 91886, de 26 de Octubre de 2021 la reclamada formuló cargos a la Compañía General de Electricidad S.A. por haber incumplido los estándares de calidad de suministro que establece el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicios de Distribución, en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación a los artículos 72-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, al haber excedido uno de los índices de continuidad de suministro vigente (tiempo medio de interrupción por cliente, SAIDI), para el período enero a diciembre de 2020, en la comuna de Higuera de la Región de Coquimbo, imputándose la infracción de la normativa precedentemente aludida.

2. Que el día 25 de noviembre de 2021 la reclamante presentó sus descargos, rechazando las imputaciones de la Superintendencia.

3. Que el 26 de abril de 2022 se dictó la Resolución Exenta por la que se sanciona a la reclamante de ilegalidad al

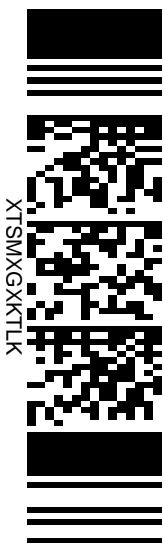


pago de una multa equivalente a 1000 Unidades Tributarias mensuales.

4. Que con fecha 10 de mayo de 2022, la sancionada interpuso recurso de reposición en contra de la referida resolución, resolviéndose por la Superintendencia de Electricidad y Combustible el 29 de agosto de 2022, mediante Resolución Exenta N° 35435 rechazar la reposición planteada y mantener la sanción ya referida.

5. Que la reclamante en sus descargos reconoció expresamente haber sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente en la comuna de La Higuera.

4°) Que, en primer término, en cuanto al marco legal aplicable para el conocimiento de este recurso de reclamación, es dable señalar que aquél es de derecho estricto, en el que no se pueden modificar los presupuestos fácticos acreditados en sede administrativa, sino analizar la legalidad del actuar de la recurrida y si aquélla se encuentra conforme al ejercicio de sus facultades acorde a la normativa vigente. Así lo ha razonado la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 99506-2020, al señalar en su Considerando sexto que *“...el reclamo de ilegalidad en análisis constituye un mecanismo de revisión de la actividad administrativa sancionadora sectorial eléctrica, que tiene como principal característica ser de derecho estricto, es decir, su finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad,*

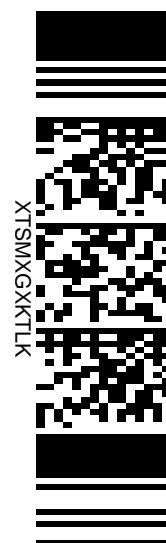


*tanto adjetiva como sustantiva, del actuar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin que sea posible por esta vía variar los presupuestos fácticos que fueron determinados en sede administrativa”, y agregándose en el motivo Octavo que “Como consecuencia de aquella restricción, en la revisión de un procedimiento administrativo sancionatorio el órgano jurisdiccional sólo podrá alterar la intensidad del castigo cuando la Administración haya omitido toda fundamentación respecto de los parámetros que la ley prescribe para su determinación concreta, o cuando los motivos explicitados en el acto para tal fin no se condicen con los hechos asentados en el sumario que le dio origen.”*

5°) Que, para el adecuado análisis y decisión del reclamo deducido, resulta conveniente recordar las normas que conforman el ordenamiento eléctrico, por cuya observancia debe velar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con arreglo a lo establecido en el artículo 2° de su Ley Orgánica, N° 18.410 de 1985, que le encomienda la función de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que tales operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituye un peligro para las personas o cosas.



De acuerdo al artículo 3° N° 34 de la Ley N° 18.410, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles está facultada para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización. A su vez, el artículo 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el D.F.L. N°4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 1 de 1982, de Minería, dispone: *“La calidad de servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos”*. En concordancia con la norma citada, la letra e) del artículo 323 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, aprobado por Decreto N° 327, de 1997, de Minería (en adelante, Reglamento Eléctrico), establece: *“Las infracciones e incumplimientos de las normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de electricidad, como asimismo de las instrucciones y órdenes que imparta la Superintendencia, serán castigados con alguna de las sanciones establecidas en el reglamento de sanciones, sin perjuicio de otras contempladas en el ordenamiento jurídico.*



*Entre otras, serán sancionadas las siguientes infracciones e incumplimientos: e) El incumplimiento de los estándares de calidad de servicio y suministro, establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, para las actividades de generación, transmisión y distribución”.*

Por su parte, el número 4) del inciso tercero del artículo 15 de la Ley N° 18.410 señala: “*Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente: 4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora*”.

Para el caso en estudio, el artículo 145 del Reglamento Eléctrico prescribe: “*Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las excepciones legales y reglamentarias*”.

Así, el artículo 221 del mismo reglamento dispone: “*Los concesionarios de servicio público de distribución son responsables del cumplimiento de los estándares y normas de calidad de servicio que establece la ley y este reglamento. Todo aquel que proporcione suministro eléctrico, tanto en generación, transporte o distribución, sea concesionario o no, será responsable del cumplimiento de los estándares de*

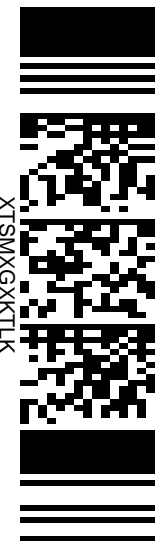


*calidad de suministro que establecen este reglamento y las normas técnicas pertinentes”; y la letra h) del artículo 222 del citado cuerpo normativo define: “La calidad de servicio es el conjunto de propiedades y estándares normales que, conforme a la ley y el reglamento, son inherentes a la actividad de distribución de electricidad concesionada, y constituyen las condiciones bajo las cuales dicha actividad debe desarrollarse. La calidad de servicio incluye, entre otros, los siguientes parámetros: h) La continuidad del servicio”.*

De igual modo, debe tenerse presente el artículo 72-14 de la Ley General de Servicios Eléctricos, prescribe que: “Los coordinados serán responsables individualmente por el cumplimiento de las obligaciones que emanen de la ley, el reglamento, las normas técnicas que dicte la Comisión y de los procedimientos, instrucciones y programaciones que el Coordinador establezca”.

Por su parte, el artículo 72-19 de la misma ley establece que la Comisión Nacional de Energía “...fijará, mediante resolución exenta, las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento de dicho sector. Para ello, anualmente, establecerá un plan de trabajo que permita proponer, facilitar y coordinar el desarrollo de éstas”.

Igualmente, por Resolución Exenta N° 706, de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, se aprobó “Norma Técnica de



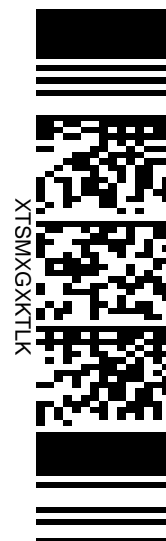


Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución”, que establece las nuevas obligaciones para las compañías de distribución, en la que se aborda principalmente las interrupciones de suministro eléctrico y mejora la calidad de la información que dichas compañías entregan a los clientes.

Así, en su artículo 1-1 Objetivo, señala “...en la presente NT se establecen las exigencias que deberán cumplir los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad y las empresas que sean propietarias, arrendatarias, usufructuarias o que operen, a cualquier título, instalaciones de distribución de energía eléctrica, ambas en adelante e indistintamente “Empresa(s) Distribuidor(as)” o “Distribuidora(s)”, respecto de: 1. La Calidad de Producto. 2. La Calidad de Suministro. 3. La Calidad Comercial”.

El artículo 1-3 Abreviaturas, en su numeral 30 indica que SAIDI corresponde a la “*Tiempo medio de interrupción por Cliente (en inglés System Average Interruption Duration Index)*”, y el numeral 31 señala que SAIFI corresponde a “*Frecuencia media de interrupciones por Cliente (en inglés System Average Interruption Frequency Index)*”.

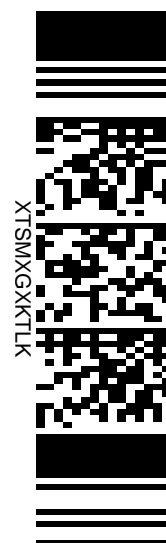
Por su parte, el artículo 4-2 Interrupciones de Suministro Globales, señala que “*De acuerdo a la Clasificación de Redes establecida en el Anexo de la presente NT, los indicadores SAIDI y SAIFI no deberán superar los límites siguientes durante cualquier periodo de doce meses consecutivos*”,



estableciendo para el indicador SAIDI, desde el año 2020 en adelante, los siguientes límites en horas: para densidad de la red alta, 5 horas; para densidad de la red media, 7 horas; para densidad de la red baja, 9 horas; y, para densidad de la red muy baja, 14 horas.

6°) Que, se debe tener presente que conforme lo solicitado por la autoridad administrativa en uso de sus facultades fiscalizadoras y con la propia información proporcionada por la Compañía recurrente de ilegalidad, se estableció que durante el período enero a diciembre de 2020, la reclamante sobrepasó el límite máximo del índice SAIDI en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, esto es, el tiempo medio de interrupción del suministro eléctrico por cliente, según se ha detallado

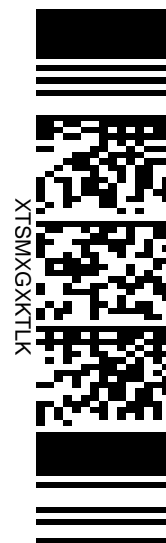
7°) Que, que las Resoluciones Exentas N°11959 de 26 de abril de 2022 y N° 35435 de 29 de agosto de 2022, constituyen actos administrativos motivados que fueron dictados por la autoridad recurrida conforme a sus facultades legales establecidas en la Ley N° 18.410, los que son el resultado de un procedimiento administrativo que se desarrolló de acuerdo a la ritualidad exigida por la normativa sectorial, instancia en que los hechos denunciados fueron debidamente constatados, teniendo en cuenta además que la recurrente no niega la suspensión del suministro eléctrico, ni el tiempo constatado.



Relevante también resulta, como lo establece la resolución impugnada, las interrupciones que constituyen las infracciones sancionadas no fueron causadas por fuerza mayor o caso fortuito, sino que se produjeron en un Estado Normal, en los términos definidos en las disposiciones contenidas en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, considerando los recursos necesarios y suficientes para prestar el servicio de distribución eléctrica de acuerdo a las exigencias de calidad establecidas en dicha Norma.

8°) Que como se advierte del marco normativo que regula la materia, la infracción que motivó la sanción, esto es, exceder los valores máximos permitidos por la normativa vigente al haber sobrepasado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, el límite máximo del SAIDI establecido, contraviene lo dispuesto en el artículo 130 del D.F.L. N° 4/20.018 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, y en los artículos 145 y 222 letra h), del Decreto N° 327, de 1997, del Ministerio de Minería, que establece el “Reglamento Eléctrico” y artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución”.

9°) Que, por otro lado, las empresas concesionarias del servicio público de distribución de electricidad deben ofrecer un servicio continuo, existiendo un límite en la cantidad de interrupciones, y en la duración de éstas, que no puede ser

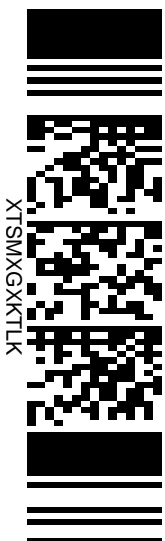


sobrepasado, de modo de otorgar un buen servicio a los usuarios.

Para controlar lo anterior la Ley General de Servicios Eléctricos, en su artículo 72-19, establece los valores máximos del SAIDI, exigidos en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente, determinados en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, dictada por la Comisión Nacional de Energía, normas en la que se fundan los actos reclamados.

**10°)** Que de lo expuesto precedentemente y de los antecedentes que obran en estos autos, aparece que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al dictar las Resoluciones que por esta vía se impugnan, tomó en consideración las circunstancias contenidas en el proceso de fiscalización en el cual los hechos fueron constatados en cuanto a la interrupción del suministro eléctrico, lo cual al tenor de los antecedentes configura la gravedad establecida en la hipótesis contenida en el artículo 15 de la Ley N° 18.410, transcrito precedentemente, para los efectos de determinar la sanción que se impuso a la reclamante, descartándose así la consecuencial vulneración de la garantía de proporcionalidad, así como de los deberes de razonabilidad y objetividad, que reprocha la reclamante.

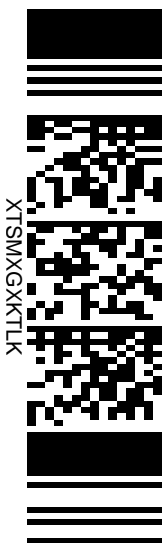
**11°)** Que, en cuanto a que el acto impugnado incrementaría artificialmente el porcentaje de afectación al



utilizar como base de cálculo el número de usuarios afectados en la comuna en que se registró un exceso de SAIDI, se ha de tener presente que el ámbito geográfico que ha sido objeto de esta investigación, al igual que las demás en distintos lugares del territorio nacional, está referido a la comuna o agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, separar la infracción de calidad de suministro por cada comuna o agrupación de comunas, nada tiene de arbitrario, como sostiene la actora.

En efecto, el estándar exigible para la determinación del tiempo medio máximo de interrupción según densidad de la red es por comuna, para lo cual corresponde utilizar la clasificación comuna o “par comuna-empresa” y, en consecuencia, la evaluación se realiza a ese nivel, conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, aprobada por Resolución Exenta N° 706 de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, la cual dispone estándares aplicables para cada par comuna-empresa.

Por ello, se ha determinado correctamente por la autoridad fiscalizadora que la infracción cometida por la

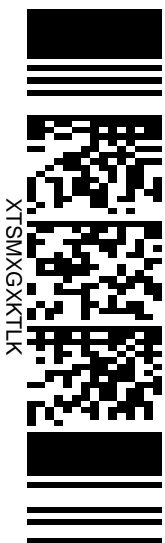


reclamante ha afectado al 34,9% de los usuarios abastecidos por ella en la comuna de La Higuera, alterando la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas.

**12°)** Que, por lo precedentemente indicado, se advierte que no se ha vulnerado el principio *Non bis in ídem*, desde que la investigación efectuada por la autoridad administrativa abarca diversos lugares geográficos del territorio nacional, comprendiendo distintas comunas o agrupación de comunas, en las que se ha constado la infracción en cuestión, constituyendo, obviamente, cada hecho uno distinto al que sirve de fundamento fáctico al acto administrativo del presente recurso.

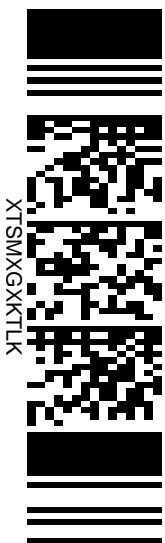
**13°)** Que, asimismo, de la propia lectura de los fundamentos del acto sancionatorio, aparece que la autoridad para determinar la cuantía de la multa aplicada ponderó todas las circunstancias establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 18.410, sin perjuicio que el indicador SAIDI considera, especialmente, la ubicación de la falla, la intensidad de la misma y los recursos disponibles para la más pronta reposición del suministro.

En efecto, aparece del considerando Noveno de la Resolución reclamada que se tuvo en consideración la importancia del daño causado (letra a), del inciso segundo del artículo 16); el porcentaje o número de usuarios afectados por



la infracción (letra b), del inciso segundo del artículo 16), que representan 34,9% de los usuarios abastecidos por la empresa recurrente en la comuna fiscalizada; el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción (letra c), del inciso segundo del artículo 16), respecto al cual se tuvo en consideración que la empresa no obtuvo beneficio, dejándose constancia que por tal razón la sanción no era mayor; la intencionalidad y grado de participación de la empresa (letra d), del inciso segundo del artículo 16), para lo cual se consideró la tecnificación y especialidad de la actividad en que participa, el alto grado de conocimiento en el área, su conocimiento de los incumplimientos y la afectación y perjuicios ocasionados a los usuarios finales; la conducta anterior (letra e), del inciso segundo del artículo 16), atendida su condición de reincidente, al haber sido sancionada por incumplimiento del SAIDI para el período enero a diciembre de 2019; y la capacidad económica de la infractora (letra f), del inciso segundo del artículo 16), calificada como robusta financieramente, sobre la base de su Memoria 2021 y su Estado de Resultados, publicados en su sitio Web y en el de la Comisión para el Mercado Financiero.

La multa aplicada por la autoridad se encuentra contemplada en la norma legal que le sirve de sustento; así es como la propia ley es la que ha establecido los rangos dentro de los que pueden fluctuar las multas, los que han sido plenamente respetados en el presente caso por la recurrida.



**14°)** Que, en razón de lo expresado en los motivos precedentes, no resultan atendibles las peticiones subsidiarias de rebajar la multa, en razón de los argumentos planteados para fundar su impugnación de ilegalidad, y ello por cuanto no aparece como atendible dado que se aprecia proporcionalidad entre la cuantía de la sanción, los hechos acreditados y el grado de afectación que de aquello derivó a los usuarios que son abastecidos con el suministro eléctrico por la recurrente de ilegalidad, considerando en este punto igualmente que no se trató de un hecho único o aislado en una sola comuna del país, existiendo otros procesos y recursos vigentes en este mismo sentido, sobre hechos de la misma naturaleza en distintas comunas y regiones del país.

**15°)** Que, de acuerdo a lo expuesto, se concluye que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha regido su actuar conforme a la regulación pertinente en la materia, procedido dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante actos fundados que informan adecuadamente los hechos que los motivan, señalando aquellos que constituyen transgresiones a la normativa vigente e indicando de manera precisa las disposiciones incumplidas, haciéndose cargo de cada una de las defensas hechas valer por la reclamante, respetándose el debido proceso, no avizorándose en consecuencia, ilegalidad en su actuar en la dictación de las Resoluciones Exentas N°11959 de 26 de abril de 2022 y N°





35435 de 29 de agosto de 2022, razón por la que el reclamo de ilegalidad formulado deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, **se rechaza**, el reclamo de ilegalidad deducido por don Juan Pablo Solorza Kojakovic, en representación de **Compañía General de Electricidad S.A.**, en contra de las Resoluciones Exentas N°11959 de 26 de abril de 2022 y N° 35435 de 29 de agosto de 2022, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin costas.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

**Redacción de la Ministra señora Book.**

No firma la Ministra señora Book, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por hacer uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

**N°Contencioso Administrativo-489-2022.**



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Alejandro Rivera M. Santiago, catorce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a catorce de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

